

edición

"El responsable principal de la violencia que estremece a Chile tiene nombre y apellido: es el general Pinochet".

La expresión, dicha por un descollante defensor de los derechos humanos, el diputado Andrés Aylwin (hermano del Presidente de la República), es, elocuente y esclarecedora para quienes aún se ilusionan con que el Comandante en Jefe del Ejército pueda tener una transfor-

EL RESPONSABLE ES PINOCHET

mación.

EL SIGLO, desde su reaparición en septiembre del año pasado, tras un largo pe-

ríodo de forzada edición clandestina, ha puesto énfasis periodístico en la denuncia de las violaciones a los derechos humanos cometidas por los aparatos represivos del régimen dictatorial. Lo ha hecho con el noble propósito de contribuir, resueltamente, a informar sin restricciones para aportar a la verdad y a la justicia, valores intransables para que los chilenos podamos reconciliarnos.

Es preocupante que Carabineros, llamado a cumplir una función insustituible en la reconstrucción democrática, se haya querellado en contra nuestra y que, por esa acción incoada en los Tribunales Militares, el director de nuestro semanario —Juan Andrés Lagos— esté encarcelado.

Todas nuestras informaciones han sido hechas en cumplimiento a normas éticas estrictas y sin ánimo torcido: ni de venganza ni de sensacionalismo.

Carabineros equivoca el camino cuando considera que contribuir, desde el punto de vista periodístico, al esclarecimiento de la verdad, es exponer "a la vindicta pública a funcionarios, entre ellos al coronel Fontaine".

Compartimos plenamente la respuesta que dio el Colegio de Periodistas a esas afirmaciones del mando policial:

"Es inaceptable que se le atribuya a la prensa la instigación a actos de venganza. Más aún: declaraciones de esta naturaleza, pueden acrecentar el clima de hostigamiento hacia los medios de comunicación, y además, pueden constituir una virtual presión sobre los tribunales que enjuician a periodistas".

"Nuestra responsabilidad de conciencia —agregó el Colegio— es seguir buscando la verdad, para contribuir al

esclarecimiento de hechos que, durante largos años, se han mantenido sin solución, así como el deber de Carabineros es colaborar con la justicia para los mismos efectos".

La detención de Juan Andrés Lagos es un claro amedrentamiento al derecho que tienen los chilenos a ser informados libremente. Ratifica la abierta hostilidad a los tribunales castrenses (que por jerarquía depende de generales como Pinochet y Torres Silva) hacia medios de comunicación y periodistas que revelamos antecedentes que Chile necesita conocer.

La vasta solidaridad que hemos recibido y el fraternal gesto, entre otros, que tuvo al Arzobispo de Santiago, Monseñor Carlos Oviedo, cuando visitó la Penitenciaría de Santiago el viernes último, muestran que hay un pueblo generoso e instituciones de elevada altura moral que comprenden cabalmente la nobleza de nuestro compromiso ético con la verdad y con la justicia, y sabrán actuar para contribuir a poner fin a la aberración jurídica, moral y política que significa que un periodista, de profundas convicciones democráticas, permanezca en prisión.

El homicidio del coronel (R) de Carabineros, Luis Fontaine, perpetrado con audacia y probablemente en un operativo muy complejo y con abundancia de recursos, pone al desnudo a los grupos vinculados al pinochetismo que intentan perturbar el normal desarrollo del proceso de democratización que lleva adelante Chile.

El pinochetismo está actuando aceleradamente. Pretende imponerle a nuestra nación un manto de olvido sobre los horrendos crímenes perpetrados durante sus más de 16 años de dictadura. Bus-

ca confundir a la opinión pública sobre los verdaderos alcances de su conducta criminal. Ha fustigado la justa decisión del gobierno democrático de designar una Comisión de Verdad y Reconciliación, para que investigue los gravísimos atentados a los derechos humanos cometidos por los organismos de seguridad del régimen militar. Utiliza la violencia y maniobras maquiavélicas para buscar asegurar la impunidad y que sus agentes continúen disfrutando de la libertad que con, sacrificio y costos sociales enormes, está reconquistando el pueblo chileno.

Cuando se produjo el atentado contra los generales en retiro de la FACH, Gustavo Leigh y Enrique Ruiz, el general Augusto Pinochet anunció que "vendrán otros", aunque esa expresión más tarde sería desmentida por el Departamento de Relaciones Públicas del Ejército.

El asesinato del coronel Fontaine, acción repudiada con honestidad por todos los sectores democráticos del país, pero también condenada por algunos grupos vinculados al violentismo pinochetista, debe ser entendido en ese contexto. Los Tribunales de Justicia deberán jugar su rol y esclarecer este hecho, que atenta contra la convivencia democrática.

La sociedad chilena debe impedir que los intentos del pinochetismo por desestabilizar el proceso democrático y castigar a los luchadores por la verdad y la justicia, ganen espacio.

Los verdaderos responsables de la violencia, como Pinochet, son quienes deben dar cuenta de sus actos ante la Justicia, para que Chile avance resueltamente hacia la plena democracia y recuperemos la paz tan anhelada.

DEMOCRACIA, SINDICATOS Y ACUERDO MARCO

Rodrigo BARRIENTOS

La molestia que produjo en los trabajadores la firma del Acuerdo Marco por parte de dirigentes del Empresariado, la CUT y el Gobierno obedece al contenido de dicho acuerdo y a los procedimientos utilizados.

Se afirma que el principal agente de la economía es la empresa privada. La realidad, el sentir de los trabajadores y la propia Declaración de Principios de la Central señalan otra cosa: son los trabajadores el principal factor de toda economía, independientemente de las formas de propiedad. El Acuerdo Marco compromete a la CUT a privilegiar el diálogo y la búsqueda de acuerdos con los empresarios. Sin embargo, la experiencia de generaciones de trabajadores indican que lo principal en el accionar sindical es el uso de las formas legítimas de movilización, incluyendo, obviamente, la huelga. El diálogo y el posible acuerdo con los empresarios son producto de la lucha, si se quiere privilegiar los intereses de los trabajadores. También juzga la gente, la calidad de los resultados obtenidos en materias socio económicas. El monto de ingreso mínimo resuelto de 26 mil pesos (por el Ministerio de Hacienda en definitiva), se acerca más a las propuestas de los empresarios (24 mil pesos) que a la de los trabajadores (\$ 35 mil). Con respecto a la asignación familiar, todos

sabemos que es imposible comprar 1/2 kilo de pan y 1/2 litro de leche con 36 pesos diarios. Ni hablar del reajuste miserable a las pensiones de los jubilados.

La retisencia de algunos dirigentes de la CUT a discutir los contenidos del Acuerdo Marco con sus bases, sólo confirma la precariedad del "pacto" logrado.

Mientras tanto, las Empresas Copec aumentaban sus utilidades a más de 13 mil millones de pesos, el Banco Chile y el Bice obtenían más de mil millones de pesos en el primer trimestre de este año. Los despidos en el mes de abril superaban los mil 600. Se declaraban huelgas en Cocar Magallanes, en Textil Universal, en 20 colegios subvencionados y la industria Lozapenco, esta bajo la amenaza de la quiebra producto de un posible fraude millonario al Fisco de 13 mil millones de pesos. Con razón se afirmaba que a los empresarios les salió gratis el Acuerdo y que el mejor chiste del año era la afirmación de Manuel Feliú, quien proclamó eufórico que la lucha de clases había terminado.

Chile y la Democracia, necesitan de un movimiento sindical fuerte, organizado y movilizado, independiente de empresarios y Gobierno, que recoja y haga realidad las ansias de Pan, Trabajo, Justicia y Libertad.